

Capítulo V

De electores a «bandidos»

Las víctimas pertenecientes al liberalismo, apoyadas inicialmente por la dirección liberal, consolidaron un movimiento de autodefensa, para combatir la ola de violencia oficial; posteriormente asumieron tácticas de ofensiva y paulatinamente se organizaron militar y políticamente, en lo que se conoció como «bandolerismo social»¹², con una connotación revolucionaria, convirtiéndose en un proyecto político alternativo «fuera de la ley». A este grupo organizado se le denominó «guerrilla liberal» o «guerrilla comunista» con una gran concentración en los Llanos Orientales, también en el Tolima y en Antioquia y en varias regiones del país. En este trabajo solamente nos referiremos a las guerrillas de los Llanos, puesto que por la cercanía con esa región, la población boyacense migró hacia allá para hacer parte del grupo de «rebeldes».

Las elecciones de 1951: entre coacción y resistencia social

Las elecciones de 1951 se iniciaron con profundas divisiones en el interior de los partidos tradicionales, liberal y conservador, aunque el liberalismo carecía de fuerza y organización para reorientar el esquema político. Solamente la tendencia disidente, encabezada por Luis Eduardo Gacharná, presidente de la Junta Popular, promovió un movimiento de izquierda, tal vez solidario con las demás fuerzas democráticas y progresistas del continente y del mundo, uno de cuyos puntos centrales consistía en liquidar los privilegios económicos y los monopolios. El liberalismo tradicional, apoyado por la Dirección Nacional y presidido por Carlos Lleras Restrepo, defendía las libertades y la separación entre la Iglesia y el Estado.

Para el liberalismo el periodo preelectoral se debatía entre la participación y la abstención en los comicios, según Gacharná¹³, «la abstención [era]

¹² Los bandoleros sociales son campesinos fuera de la ley, a los que los señores y el Estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, luchadores. El interés de este trabajo es analizar la relación entre el rebelde y el campesino (Hobsbawm, 1976, p. 10; y 1974, p. 14).

¹³ "El abogado Luis Eduardo Gacharná, presidente de la llamada Junta Popular Nacional del liberalismo y jefe del movimiento disidente de las orientaciones de la mencionada dirección... declaró que uno de los puntos capitales de la batalla política en que se hallan empeñados, tiene como uno de sus objetivos principales, liquidar los privilegios económicos y los monopolios" (Revista Semana, 221, 13 de enero de 1951, p. 5). "En Colombia hay minorías prepotentes, que adquieren lo que yo llamaría una riqueza ignominiosa" (Revista Semana, 222, 20 de enero de 1951, p. 5).

una excelente táctica política para que el conservatismo, entrara al juego de las ambiciones electorales, se dividiera electoralmente y se creara su propio problema interno» (1951). De acuerdo con Eduardo Santos, la abstención era una táctica para probar quién era el más fuerte y para convertirse realmente en el partido de la adversidad, era mejor dejar solos a los conservadores y hacer caso omiso de sus planteamientos. En cuanto a la tesis abstencionista era necesario examinar las garantías ofrecidas por el Gobierno, abrir un nuevo frente de oposición para activar la lucha de las masas, prever el debilitamiento del partido y vigilar desde las corporaciones la acción del Gobierno. De esta manera se produjo una nueva división en el interior del liberalismo, entre el tradicionalismo y el liberalismo popular como movimiento de masas que se presentaba en contra de la oligarquía.

Con miras a organizar las jornadas electorales, la dirección del liberalismo disidente convocó a una Convención Nacional en la que serían tratados algunos asuntos relacionados con la organización del debate; sin embargo, la convención no tuvo éxito porque se aplazó en dos ocasiones, debido a que muchos delegados no asistieron, pues no fueron informados de los cambios; además, los liberales que seguían las orientaciones de la Dirección Nacional daban poca credibilidad a Gacharná.

En cuanto al conservatismo, la disidencia estaba orientada a nivel nacional por Gilberto Alzate Avendaño; a este grupo le interesaba no solamente la política general de su partido, sino la fundación de un grupo homogéneo alrededor de la candidatura de Alzate, quien se dedicó a visitar las provincias, organizar comités y pronunciar discursos, mientras el tradicionalismo proclamó la candidatura de Mariano Ospina Pérez. Pero en regiones como el Valle del Cauca la división del conservatismo se hizo más profunda y hacia el año 1952 se establecieron tres facciones: los Borrero Olano (Guillermo y Juan) con su *Diario del Pacífico*; Álvaro Lloreda con *El País*, que dirigían Silvio Villegas y Luis Alfonso Delgado; y Hernando Navia (Revista Semana, 30 de mayo de 1952, p. 10).

En esta dinámica, el conservatismo inició la campaña electoral para los comicios que estaban programados para marzo, pero que finalmente fueron trasladados a septiembre. Centró su interés en Boyacá, por considerarlo un baluarte del conservatismo desde donde se podrían «pelear las grandes jornadas de la patria» (El Siglo, 1951), con lo cual se pretendía obtener nuevos triunfos para afianzar las ideas y las aspiraciones del Gobierno, de tal manera que un Congreso homogéneo sería una garantía para ejecutar las reformas del Gobierno.

Las actividades se centraron básicamente en la cedulaación y revisión de censos, desplazamiento de líderes y dirigentes a las diversas provincias para dar instrucciones sobre organización de directorios y de actividades electorales, y recolección de fondos para la campaña. Por su parte, el periódico *El Siglo* afirmaba que Boyacá vivía una gran tranquilidad y que se daban las garantías necesarias a todos los ciudadanos, lo que hacía parte del progreso de la patria que nunca había logrado el liberalismo. Con esto desvirtuaba el papel asumido por la fuerza pública en relación con los diversos choques ocasionados en esta región. El conservatismo inició su campaña con la visita a las regiones de Valderrama, Norte y Ricaurte, hasta llegar a la mayoría de localidades del departamento. Se refirió al bandolerismo como un caso aislado que era controlado por el Gobierno, además resaltó la labor de la Aeronáutica Civil, al favorecer el libre tránsito a la región de los Llanos.

Al igual que en otras épocas, la campaña asumió un tono agresivo con el adversario, tanto *El Siglo* como los líderes del conservatismo responsabilizaron al liberalismo de ser colaboradores del bandolerismo. En marzo de 1951, *El Siglo* denunció la articulación del Directorio Liberal con los «bandoleros», señaló que estos suministraban dinero y armas al grupo de guerrilleros dirigido por Eliseo Velásquez.

Y como parte de la campaña electoral, el 12 de marzo el conservatismo instaló los directorios locales denominados «comandos del conservatismo». En cada vereda se nombró un capitán, encargado de organizar las milicias, de dar instrucción militar, levantar el censo tanto de los reservistas como de los electores y de establecer la clase y número de armas.

Los partidos continuaron su actividad organizativa para los comicios que se efectuarían en septiembre, el conservatismo unido en torno a la tendencia gobiernista, encabezada por Urdaneta Arbeláez, realizó manifestaciones en diversas localidades del departamento. Por su parte, el liberalismo se sectorizó en torno a los planteamientos del lopismo y del gaitanismo, facciones que decidieron no participar en la convención liberal de junio, en la cual se proclamaría como jefe del liberalismo a Eduardo Santos y se emitirían directrices para la campaña electoral venidera. La situación para el liberalismo se hizo cada vez más tensa, los dirigentes y periódicos centraron su interés en otro tipo de situaciones; por ejemplo, *El Tiempo* se concentró en describir la guerra de Corea, inicialmente hizo énfasis en el avance del comunismo y en la política de organización de los Estados Unidos, y solamente en un pequeño recuadro denunció el asesinato de los jefes del conservatismo en Chiquinquirá, Miguel Ortegón y Luis Felipe Fajardo, ocurrido el 26 de marzo, hecho que ocasionó una protesta de los presos, quienes, tras incendiar el edificio de la cárcel, se fugaron.

A través de los informes de gobernadores y secretarios pudieron determinarse algunos hechos de violencia. En abril hubo diversos asaltos a las estaciones de policía, uno de estos, el del día 28 a Cusiana en «Vijua», que dejó un saldo de ocho muertos. El 8 de mayo en Vegón, área de Recetor, se produjo otra toma que dejó un saldo de cuatro muertos, se hicieron igualmente atentados a Pajarito, Labranzagrande y Recetor, aprovechando la ausencia de la fuerza pública; de estos hechos se responsabilizó a un grupo de «bandoleros», aproximadamente 400, con la orientación de Plutarco Calderón. En el área de occidente, el 15 de mayo se presentó también una serie de hechos delictivos, como el asesinato de dos familias, el incendio de casas y el robo de ganado, aproximadamente 70 cabezas (Archivo General de la Presidencia de la República, Fondo Despacho del Señor Presidente, 1951, caja 85, carpeta 29, folio 12).

En mayo también hubo un asalto a las veredas de Capellanía, Morro y Lajas del municipio de Miraflores, hecho que dejó cerca de 45 muertos, entre ellos varios agentes de la policía y numerosos heridos. Después de la toma, incendiaron las casas (Archivo General de la Presidencia de la República, Fondo Despacho del Señor Presidente, 1951, caja 85, carpeta 29, folio 10).

Uno de los hechos que más generó el repudio de la policía fue la toma de Pachaquiario, coordinada por Luis Alberto Parra. Uno de los capturados hizo una descripción de la iniciación de este grupo:

El primer ataque lo llevaron a cabo en Barranca de Upía, en donde asesinaron al comandante del puesto de policía y a cinco soldados con su correspondiente armamento, se sumaron al cabo Aljure, quien desde ese momento formó el grupo de «bandoleros» al mando de Tulio Bautista. A este grupo le llegó ocho fusiles en sacos de harina transportados desde Bogotá en avión, esto fue hace más o menos un año. Posteriormente ya con un grupo más numeroso llevaron a cabo el ataque a Monterrey donde mataron a 9 soldados y se llevaron 11 fusiles con su correspondiente munición (Archivo General de la Presidencia de la República, Fondo Despacho del Señor Presidente, 1951, caja 83, carpeta 29, folio 4, 5 y 6).

Señala el informante que recibieron apoyo en armamento desde Bogotá: fusiles y ametralladoras; de este grupo hacía parte también Luis Alberto Parra, con unos treinta hombres, encargado de operar en la zona 8, «comprendida entre los ríos Upía y Humea» (Barbosa, 1992). Entre Parra

y Bautista coordinaron el operativo a Pachaquiario, enviaron dos personas a estudiar la situación, a determinar el número de agentes y sobre esa base se planeó la toma en la que participaron cerca de 54 hombres. En el ataque se utilizaron fusiles, ametralladoras y bombas explosivas. En este atentado perecieron seis agentes y diez civiles, entre estos una mujer y dos menores. Los asaltantes huyeron y se llevaron seis agentes, más el armamento y algunos civiles, y después de tomarse el retén incendiaron las instalaciones de la guardia (Archivo General de la Presidencia de la República, Fondo Despacho del Señor Presidente, 1951, caja 83, carpeta 29, folios 4, 5 y 6).

Otros hechos se presentaron en Orocué, en los cuales murieron el juez del circuito y cuatro civiles; en San Pedro de Armenia hubo un atentado en el que murieron doce soldados y un sargento, los asaltantes se llevaron el armamento, fusiles y munición. Esta toma fue coordinada por Eduardo Franco, comandante del área, quien tenía un grupo de aproximadamente 40 hombres.

El directorio conservador del occidente de Boyacá presentó una serie de denuncias sobre ataques a los conservadores; el comandante de Muzo solicitó el retiro de las tropas del ejército, el envío de más policía y la permanencia del alcalde. Se denunciaron algunos delitos, tales como: asesinatos, incendios, robos, violaciones, requisas en las casas de los conservadores, ultrajes en tono amenazante como «eso les pasa por ser godos» (Archivo General de la Presidencia de la República, Fondo Despacho del Señor Presidente, caja 83, carpeta 13, folio 15); además, los soldados requisaron a los conservadores, a la policía y les quitaron las armas. El informe finalizaba señalando: «La chusma liberal acaba de asesinar a 3 conservadores en las veredas de Peña, Zulia, del municipio de Pauna; según informe del Directorio Nacional Conservador, el 12 de los corrientes algunos «bandoleros liberales» asesinaron a un conservador en la vereda de La Vega del municipio de Muzo» (Archivo General de la Presidencia de la República, Fondo Despacho del Señor Presidente, caja 83, carpeta 13, folio 15). En relación con la persecución a los liberales no tenemos mayor información.

Sobre la situación de orden público en el occidente de Boyacá encontramos un expediente en el cual se hace alusión al asalto y asesinato de un conservador en la población de Otanche. Según la denunciante, tres individuos irrumpieron en su casa y atacaron a Eliécer Virgüez con machete y plomo, y mientras decían: «es mejor que terminemos de matar ese hijueputa godo, a este lado son gran hijueputas godos», hicieron dos disparos (Archivo Judicial de Tunja, Juzgado Primero Superior, 1951, proceso 1878). Según las declaraciones, había un conflicto por la pérdida

de una marrana, lo que nos permite deducir que a todo hecho se le daba un tinte político y que no todos los infractores hacían parte de las guerrillas, sin embargo, el directorio conservador los responsabilizó. Poco tiempo después, los sindicatos fueron detenidos y judicializados.

Por otros hechos que se presentaron en Muzo y Miraflores, el ministro de Gobierno responsabilizó a los «bandoleros» de los constantes ataques que habían arrojado un saldo de 64 muertos en seis días; las bandas operaban en número de 100 hombres que atacaban al grito de «viva el partido liberal» y desaparecían (Revista Semana, 1951, p. 5-6). A nivel nacional los focos de violencia estaban ubicados principalmente en los Llanos Orientales, el noroeste antioqueño, el territorio Vásquez, en algunas regiones de Boyacá, Cundinamarca, y en las zonas montañosas de Chaparral (Tolima), (1951, p. 5-6).

Con el propósito de «apaciguar» la situación de orden público, el conservatismo ofreció respaldo al presidente Gómez para iniciar una campaña de exterminio contra el bandolerismo liberal que, según ellos, atentaba contra la estabilidad del Estado.

A mediados de junio de 1951 se produjo la captura de Eliseo Velásquez en Venezuela, aunque se intentó juzgarlo desde Colombia, los defensores (abogados) venezolanos solicitaron los testimonios de algunos miembros de la dirección nacional del liberalismo¹⁴. Todos coincidieron en señalar que existía una situación inaceptable, creada por el Gobierno, y que Eliseo Velásquez, según Eduardo Santos «actuó como defensor de la democracia republicana, la constitución y las leyes, así como en defensa del partido liberal perseguido» (Revista Semana, 26 de mayo de 1951). Alberto Lleras, por su parte, señaló: «para mí era indiscutible que el Gobierno se había puesto fuera de la Constitución y de las leyes, que había atropellado los derechos ciudadanos; y que en tales condiciones no solamente era lícito luchar por la defensa de esos derechos, sino que hacerlo constituía un deber para todos los colombianos» (Revista Semana, 26 de 3 mayo de 1951). Y López, a su vez, dijo: «Eliseo Velásquez procedió reaccionando contra las violencias y persecuciones oficiales, decretadas por el Gobierno de Ospina Pérez, contra los adherentes del partido liberal, en los Llanos orientales y otras regiones del país» (Revista Semana, 26 de mayo de 1951).

De esta forma, los dirigentes liberales justificaron la labor de uno de los cabecillas del movimiento guerrillero, aquel, que el mismo día del asesinato

¹⁴ Alfonso López, Darío Echandía, Carlos Lozano, Carlos Lleras, Luis Eduardo Nieto Caballero, Roberto Rodríguez y Rafael Escallón (este último murió en un accidente aéreo antes de rendir declaración).

de Jorge Eliécer Gaitán, 9 de abril de 1948, organizó un grupo de rebeldes y efectuó la primera toma guerrillera en Puerto López. Los líderes liberales no solo defendieron el papel de Velásquez -quien, hasta ese momento, era visto por los dirigentes como un luchador y asumían su acción como parte de la lealtad con el partido- sino que responsabilizaron al Gobierno conservador. Por su parte, el Gobierno venezolano le otorgó la libertad al bandolero al no encontrar pruebas contundentes contra él.

Esta campaña electoral, más que medición de fuerzas en términos de votos, se convirtió en un medio de persecución, intimidación, tanto de los «bandoleros oficiales» como de los «bandoleros políticos». La característica de estos comicios fue el armarse para el debate y el control territorial y militar de ciertas áreas. Vale anotar que las guerrillas liberales aún contaban con el respaldo de la dirección nacional, tenían organización propia que les permitía atacar para obtener armas y municiones, lo que les daba poder desde la ilegalidad; mientras la población civil que seguía las normas del Gobierno, permanecía política y militarmente coaccionada por las autoridades «legítimas».

La persecución al liberalismo promovió la conformación de dos tendencias en el interior del liberalismo, la de los altos funcionarios que tenían la esperanza de retomar el poder por medios pacíficos en las elecciones y aunque rechazaban la ola de violencia no tenían una orientación ideológica clara que lograra capturar política y militarmente a los alzados en armas. La otra tendencia conformada por campesinos y en general sectores populares que vieron en las armas la mejor estrategia para la defensa, pero tampoco tenían una orientación clara sobre el sentido y orientación de la revolución, y esperaban que sus líderes desde Bogotá dieran las instrucciones. El movimiento guerrillero maduró tanto en tácticas militares como en la consolidación de un proyecto político, lo cual nos permite ver que el objetivo de su lucha se había transformado de la defensa del partido a la reivindicación de su papel como ciudadanos.

Precisamente la persecución y la falta de garantías motivaron a la dirección del liberalismo a proclamar la abstención, a través de una resolución:

La Dirección Liberal Nacional... RESUELVE: 1. Reiterar la orden de abstención del liberalismo en las próximas elecciones. 2. Declarar que quienes diciéndose liberales, presenten sus candidatos a dichas elecciones no reciben apoyo de la colectividad. 3. Declarar igualmente que si cualquiera de esas personas llegaran a los comicios no llevarán informe alguno, ni la responsabilidad (El Espectador, 28 de agosto y 3 de septiembre de 1951).

Esta decisión no afectaría la participación de quienes fueran elegidos jurados de votación, siempre y cuando contaran con garantías suficientes.

Mientras que el conservatismo, a través de *El Siglo*, motivó al electorado a emitir su voto por este partido: «el que no vote favorece al adversario. Mañana se da la última batalla por la consolidación del régimen dice la suprema directiva. Estamos obligados a demostrar el caudaloso respaldo de la opinión pública. Una misión grande tendrá el próximo parlamento» (1951). De esta manera lograría afianzar el proyecto de revolución social que, según los dirigentes del conservatismo, se había iniciado con los cambios en la agricultura, la creación del seguro social y el derecho laboral. Con esta reforma social pretendía extinguir la lucha entre el capital y el trabajo para sustituirla por la cooperación.

Antes del debate electoral se intensificó la actividad del directorio conservador, especialmente las manifestaciones y visitas a varias localidades boyacenses, como Tunja y Ramiriquí. Esta fue una de las campañas menos sangrientas por dos razones: la vigencia del estado de sitio y la abstención del liberalismo. En los comicios por efectuarse se elegirían representantes y senadores; se nombraba un representante por cada 90 000 habitantes y 190 000 por cada senador. A nivel nacional, en las elecciones de junio de 1949, 1 751 106 votantes eligieron a 63 senadores y 132 representantes, de los cuales 34 senadores eran de filiación liberal y 29 conservadores; y 69 representantes de filiación liberal y 63 conservadores, conformándose aún el Congreso con mayoría liberal.

Finalmente, los resultados electorales obtenidos durante los comicios de septiembre, para Senado y Cámara, en las capitales de círculos electorales, fueron los siguientes:

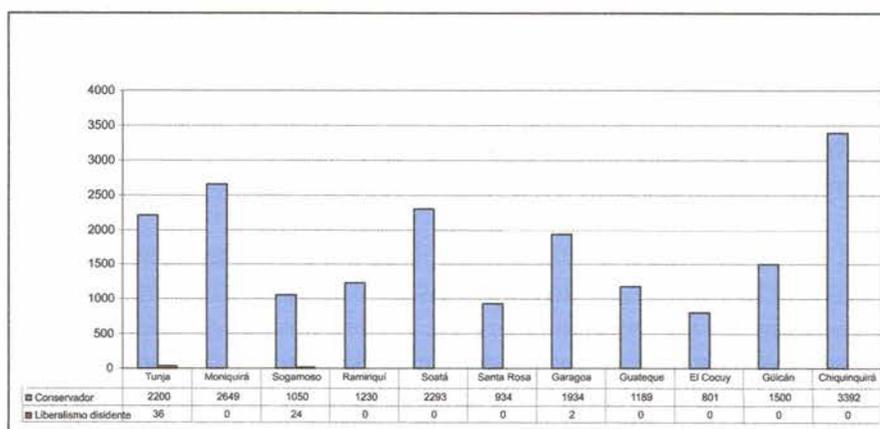


Figura 2. Elecciones para Senado y Cámara en capitales de Círculo Electoral
Fuente: elaborada a partir de datos obtenidos de *El Siglo* (17 y 18 de septiembre de 1951).

En Boyacá se obtuvieron 112 764 votos conservadores y 112 por el liberalismo disidente, como puede apreciarse en la figura. Durante estas elecciones el conservatismo obtuvo el 99,9 % del total de los votos, lo que significó que el Congreso fuera homogéneo conservador, puesto que los votos del liberalismo disidente no fueron representativos, según el cociente electoral. El liberalismo prácticamente desapareció del mapa político y el conservatismo quedó en libertad para plantear y ejecutar las reformas.

En términos generales, la situación de orden público en Boyacá permaneció estable, pero en el Valle y en Viotá (Cundinamarca) hubo alteraciones que obligaron a suspender el desarrollo de los comicios. Al respecto, *El Siglo* habló de un ejemplar triunfo y de las garantías ofrecidas por el Gobierno para el desarrollo de las elecciones.

La culminación de los procesos electorales y el proceso de homogeneización del poder no significó disminución del índice de violencia, como se ha señalado; el conflicto tomó una orientación político-social, cuyo fin no eran las elecciones, sino la toma del poder por la fuerza para garantizar el retorno de las libertades.

En octubre ocurrió la toma de Maní por parte de la guerrilla, en esta población los guerrilleros atacaron y asaltaron; hay denuncias de asesinatos de hombres, mujeres y niños, saqueos, incendio de casas, robo de ganado y bienes. Días después de los atentados fueron capturados 16 de los bandoleros, quienes serían llamados a consejo de guerra verbal. Este hecho fue reprobado tanto por conservadores como por el liberalismo, el periódico *El Tiempo* publicó: «recíproco respeto de los partidos es la base para la pacificación de la República, cooperación de los partidos al Gobierno para el cumplimiento de las funciones» (1951). Esta declaración, a la vez, fue una forma de condenar los hechos de violencia perpetrados por los llamados «bandoleros», y generó un primer rompimiento entre los guerrilleros del Llano y la dirección del liberalismo.

A partir de estos hechos, el directorio liberal también reprobó la acción de los grupos disidentes y los denominó «bandoleros». Precisamente en un titular de prensa del 7 de octubre señaló: «enfática declaración del bandolerismo es la declaración conjunta de los directorios» (*El Tiempo*, 1951). En consecuencia, los partidos decidieron apoyar las políticas del Gobierno para combatir a los infractores, porque, según ellos, los alzados en armas, amparados o no en los directorios políticos, atacaban la vida y propiedad de los colombianos, sembraban la inseguridad en los campos y aldeas.

Las negociaciones de los dirigentes políticos y el apoyo al Gobierno desconcertaron a los grupos guerrilleros, quienes sintieron que la causa de su lucha, que hasta el momento era la defensa del partido, había dejado de tener fundamento. Esto hizo que centraran su atención en un proyecto conjunto que demandaba más organización, más equipamiento y el diseño de otras tácticas para avanzar territorial y militarmente. Posteriormente, el 8 de octubre, se produjo un asaltado al caserío de Boca de Monte en San Martín (Meta), que dejó un saldo de once muertos y varios heridos.

Mientras en Colombia se libraba una batalla entre civiles y militares en diversas regiones del país, un grupo de colombianos combatía con el Batallón Colombia en la guerra de Corea en apoyo a los Estados Unidos en la lucha anticomunista. De donde adquirieron experiencia en términos de manejo de armamentos y tácticas militares, la que al regreso de las tropas sería implementada en las pequeñas poblaciones colombianas.

Laureano Gómez estuvo en el poder hasta el 30 de octubre de 1951, en su reemplazo fue designado Urdaneta Arbeláez. Durante este lapso, al hacer un balance sobre su acción presidencial en Boyacá, Carlos Arturo Torres (gobernador) señaló: «el bandolerismo se adelanta como un movimiento netamente liberal, todos los hogares asaltados han sido conservadores» (El Boyacense, 1951), y sustentaba estas acciones en el propósito de reconquista del poder. En cuanto a las localidades afectadas por el bandolerismo, según el gobernador, la población había decidido organizarse: «les daremos a los campesinos todo el auxilio legal que sea necesario para que puedan hacer uso, eficientemente, del derecho de legítima defensa» (El Boyacense, 1951). Con esta expresión apoyó la organización de grupos parainstitucionales (paramilitares) para combatir a los guerrilleros con las mismas tácticas.

En términos político-administrativos, también los concejos municipales habían dejado de sesionar y prácticamente habían perdido su papel representativo, los últimos concejos fueron elegidos el 5 de junio de 1949 para un periodo de dos años, que culminó el 30 de octubre de 1951. Por su parte, el Gobierno departamental de Antioquia creó juntas asesoras municipales de cinco personas, sin sueldo, para que actuaran por un periodo de un año, en representación de los dos partidos tradicionales, la junta sería designada por el gobernador (Revista Semana, 19 de enero de 1952). Esta estrategia gubernamental fue extendida a todos los departamentos y puesta en ejecución en el mes de octubre de 1951, quedándole la potestad al Gobierno local o departamental y limitando la participación de los ciudadanos en la designación de sus propios representantes y legisladores municipales.

Estas ideas fueron retomadas por los gobernantes locales y en poblaciones como Tenza se consolidó una junta asesora de la alcaldía, conformada por cinco miembros, entre ellos el cura (Decreto 16, 1952), que suplantó la labor del concejo municipal, así como en la Italia fascista se había sustituido la cámara de diputados por una cámara corporativa. En Tenza esta junta desempeñaba funciones legislativas, asesoraba al alcalde en cuestiones de carácter social, de obras públicas e instrucción pública.

Por su parte, las guerrillas liberales habían logrado durante este lapso (1948-1951) madurez en la organización, habían pasado de la autodefensa a la consolidación de un movimiento con un proyecto político y actuaban unidos bajo la denominación de «Ejército Revolucionario Liberal de los Llanos - Estado Mayor General».

Las guerrillas liberales: de «bandidos políticos» a «bandidos sociales»

En el norte de Boyacá, después de los hechos del 9 de abril de 1948, se conformaron grupos de autodefensa o resistencia social, con la población desterrada por los guardias del Gobierno. Las primeras manifestaciones ocurrieron el mismo 9 de abril, posterior al asesinato de Gaitán, con la toma de la estación de policía de Puerto López. Esta fue la primera acción de Eliseo Velásquez¹⁵, quien se convirtió en uno de los bandoleros (guerrilleros) más aguerridos de la zona. Los líderes locales del liberalismo en forma independiente organizaron pequeños ejércitos de campesinos, con una estructura equivalente a la gamonalista, inicialmente tomaron las herramientas de trabajo como sus propias armas, para defenderse de la cruel policía chulavita.

Ante el auge de la violencia, los focos de la resistencia aumentaron, además de la de los Llanos, surgieron guerrillas liberales en diferentes sitios del país, muchos se ubicaron cerca de la Sierra Nevada del Cocuy, en el páramo de Reichinga, en el área del Líbano, donde también había focos de guerrillas comunistas. Estas organizaciones mantenían en permanente estado de zozobra a la fuerza pública, en parte porque sus ataques se realizaban esporádicamente, eran organizaciones móviles que utilizaban el ataque por sorpresa contra la fuerza pública (El Nacional, 6 de septiembre de 1952).

Los personajes más destacados de la organización guerrillera de los Llanos fueron Guadalupe Salcedo Hunda, los hermanos Batista, que tenían el comando en Monterrey, Álvaro y Jaime Parra, que tenían el comando de

¹⁵ Conocido como Cheito, él era un migrante huilense que trabajó en una finca de Pachaquiario como arriero.

Cumaral, Eduardo Franco, ideólogo de la guerrilla, era de los más estudiados, Jorge Carreño, jefe guerrillero, Dumar Aljure, desertor del ejército siendo cabo primero, porque no ejecutó una orden para matar a un grupo de liberales.

Durante el periodo 1948 y 1949 el movimiento vivió fuertes incertidumbres frente a la posición vacilante del directorio liberal; sus líderes en ocasiones no sabían si continuar la lucha por la causa -retorno del liberalismo- o someterse a las autoridades legítimas, esperaban alguna directriz desde Bogotá. Pero la dirección nacional del liberalismo parecía no comprometerse con el movimiento popular, y aunque eran conscientes de que la labor de los alzados en armas era la base para derribar el régimen, a la vez temían por la movilización popular, aunque no compartieran los mecanismos que utilizaban los rebeldes, consideraban que la respuesta armada era el medio que había hecho frente a la violencia oficial.

Hay que mencionar que la base social de la guerrilla liberal de los Llanos eran campesinos perseguidos por la policía chulavita y que sus jefes eran los líderes locales del liberalismo, además, cada uno de los líderes se defendía y atacaba en forma desarticulada. Podríamos decir que en su primera etapa era un movimiento disperso, local y sujeto a las rivalidades entre sus líderes (Sánchez, 1985, p. 232).

La dirección liberal en varias ocasiones les ofreció ayuda a los guerrilleros pero no les cumplió, y mientras crecía el número de seguidores, disminuían las provisiones de alimentos y armamentos. Esto hizo que se diseñaran tácticas para recaudar recursos. Mediante el decreto 101 establecieron un impuesto a la ganadería, que implicaba que los liberales pagaran el 10 % por el ganado registrado y los conservadores el 20 %.

Este hecho polarizó la relación entre hacendados y «bandoleros» y los primeros crearon las famosas «guerrillas de paz» como táctica para combatir a sus antiguos copartidarios: «las guerrillas liberales». El Gobierno (policía y fuerzas militares), por su parte, incrementó la ofensiva contra los rebeldes y apoyó la creación de grupos contrainsurgentes. En noviembre de 1950 se realizaron varias reuniones en las cuales los ganaderos hicieron un pacto con los militares para combatir la insurgencia, a partir de allí los ganaderos apoyarían toda acción contrarrevolucionaria.

Después de diversos atentados y confrontaciones con la policía, los guerrilleros se organizaron militarmente, sus actividades comenzaron a regirse por una constante disciplina y entrenamiento militar y sus armas eran modernas, para la época, pues muchas de estas eran suministradas

por los líderes, por tomas a las estaciones de policía o por tráfico con el ejército.

La guerrilla, unificada bajo el nombre de «Fuerzas Liberales Populares de Liberación de Colombia, División Gustavo Jiménez, Llanos Orientales», acordó mantener el orden, evitar actividades de concentración, seguir en contacto con la dirección del liberalismo, establecer comandos en otras localidades para facilitar la comunicación y evitar el avance de la policía. Además se diseñaron tácticas para la recolección de las finanzas y se convino que ningún grupo de rebeldes, «bandoleros», actuaba sin control (Franco, 1976, p. 232). Con este tipo de medidas se proyectó la noción revolucionaria que iba más allá de la rivalidad partidista y de la fidelidad con el líder político, se determinó que todos los participantes deberían asumir el sentido de la revolución como un proyecto colectivo para mejorar las condiciones de vida.

Para tratar de combatir la ofensiva guerrillera, el Gobierno incrementó las tácticas militares a través del Batallón Vargas, creado en marzo de 1950; además cerró las vías de acceso al llano, cercó económicamente la región, con el objetivo de rendir o aniquilar a los rebeldes mediante la aplicación de estrategias cívico-militares y guerra regular directa.

Por otra parte, los ganaderos se reunieron en Sogamoso, en enero de 1951, y como resultado de este encuentro se conformó un «comité de defensa» que decidió apoyar las medidas de control establecidas por el Gobierno. En esta reunión se aprobó la consolidación de las guerrillas de paz, el establecimiento de retenes en los hatos, los permisos y salvoconductos para transportadores de ganado, comerciantes y hateros.

Con posterioridad a la reunión de los ganaderos en Sogamoso, se inició una arremetida contra los «traidores» de los hatos y haciendas, y a partir de allí cambió el sentido de la revolución, se declaró la guerra a muerte contra los hacendados traidores, quienes en adelante serían perseguidos, asesinados e intimidados como parte del proceso político-militar adelantado por los «bandoleros», como la toma al retén de chulavitas en la localidad de Páez. La situación entre «bandoleros» y ganaderos transformó el sentido de la revolución, de una noción política contra los conservadores, chulavitas inicialmente, ahora iba contra los dueños de los hatos, los capitalistas, como los denominaban los guerrilleros, que constituyó otra etapa de la revolución y que transformó la acción de los «bandoleros», de ser los cuidanderos de las fincas, a ser los «verdugos».

El Gobierno, los ganaderos y la fuerza pública implementaron la táctica de hatero liberal más chulavita, para combatir a los rebeldes. Esta táctica

de pacificación implicó el armar a la gente de la misma guerrilla con amenazas o premios, para perseguir a sus copartidarios, y de esta forma se consolidó la contraguerrilla; además se establecieron campos de concentración, bloqueo económico e incremento de la persecución con pie de fuerza y bombardeos.

La labor antiguerrillera del Gobierno y de los ganaderos generó más terror y crueldad, la consigna era destruir a los «bandoleros», además se publicó «todos los liberales son bandoleros» (El Tiempo, 1951), lo que hizo que fueran desterrados y coaccionados los seguidores del liberalismo en todas las regiones de Boyacá y los Llanos. Además, el Gobierno creó el «destacamento de los Llanos», 20 de mayo de 1951, como estrategia político-administrativa para controlar el área, y el 1 de noviembre de 1951 Carlos Bejarano tomó posesión como jefe civil y militar.

Ante el recrudecimiento de la violencia en Tolima y los Llanos Orientales y la acusación del Gobierno al liberalismo, un sector del liberalismo se pronunció en contra de los señalamientos del Gobierno y declaró que la violencia había sido provocada por las acciones violentas de la fuerza pública y que por este motivo se deberían tomar medidas en torno a la extinción de dominio, el levantamiento del estado de sitio y al indulto de penas para los «bandoleros», teniendo en cuenta la responsabilidad del Gobierno. El liberalismo señaló que no tenía intenciones de reconquistar el poder, como la implementación de un «modus vivendi» que le permitiera ejercer su función de oposición en condiciones de libertad, justicia y tolerancia. Pero el Gobierno respondió con el incremento de ofensivas y organizó una serie de batidas con las llamadas «fuerzas legítimas», que hacían parte del partido del orden, y de esta forma ni la negociación ni la intermediación fueron parte de la pacificación.

A partir de estas acciones guerrilleras, los líderes de los dos partidos iniciaron a través de todos los medios un proceso de negociación con los líderes guerrilleros, con la orientación de Urdaneta Arbeláez, ministro de Guerra. A mediados de 1951 se produjo el primer acercamiento con representación de José Gnecco Mozo, abogado conservador, y Alfonso López; esta iniciativa tuvo acogida tanto por los dirigentes de los partidos como de los alzados en armas, pero poco impacto generó en el Gobierno. En agosto Gnecco viajó a los Llanos para escuchar a los guerrilleros, de este encuentro, en el cual los revolucionarios presentaron un documento con las llamadas capitulaciones, se produjo un acta en la que los guerrilleros aceptaron la formación de un comando de pacificación, para iniciar los procesos de negociación con el Gobierno.

Por este comunicado podemos apreciar que en el movimiento guerrillero se habían producido cambios trascendentales, tanto en su estructura, organización, como en su concepción ideológico-política. Los operativos no eran en contra de la beligerante policía chulavita, sino de las políticas asumidas por el Gobierno, y a lo largo de las propuestas se pudo apreciar la responsabilidad del Gobierno por la ola de violencia. Tenían un proyecto político-administrativo basado en la distribución territorial, además habían adoptado la denominación de «Fuerzas Revolucionarias de los Llanos Orientales», bajo la jefatura de Tulio Bautista.

Pero Urdaneta cuestionó la acción de Gnecco y ordenó su detención en Villavicencio, posteriormente se desató una fuerte persecución contra la guerrilla, lo cual desconcertó a los jefes y puso en entredicho las conversaciones con el abogado conservador. La respuesta a este intento de negociación fue más beligerancia por parte de las fuerzas militares y de la guerrillera, de modo que se generalizaron el bloqueo y las matanzas por todo el Llano.

Una segunda reunión de los guerrilleros se efectuó en agosto de 1950, diferenciaron a la población civil de la guerrilla y orientaron los ataques hacia el sur; sin embargo, las reuniones de mayor trascendencia para el movimiento se efectuaron entre mayo y junio de 1951, en las que se centralizaron el poder, las armas, los alimentos, en general se unificó el movimiento y se determinó combatir a los traidores e informantes. Además, en conjunto se diseñaron tomas a las estaciones de policía y ejército. Desde allí se determinó que la revolución operaría en todas las direcciones y en todas las medidas.

En diciembre de 1951 nuevamente se adelantó una reunión de directorios políticos con miras a encontrar una salida conjunta a la situación de orden público, pero una polémica en el interior del grupo guerrillero dejó entrever que este en realidad no tenía voluntad política para negociar la paz ni de apertura democrática.

En diciembre de 1951, Tulio Bautista se reunió con Alfonso López en su hacienda de Potosí, allí entregaron una nota de agradecimiento, que señalaba: «a nombre de los rebeldes contra la tiranía... agradece sus esfuerzos... gestionar la paz en el Llano como liberales disciplinados que somos acatamos vuestra voz y por tanto estamos dispuestos a aceptar las voces de paz con los miembros de la Diliberal y a su vez con el Gobierno. Para que el conservatismo cumpla su palabra y no nos siga llamando forajidos bandoleros» (Carta enviada al expresidente en el mes de enero de 1952, Archivo General de la Presidencia de la República, despacho del Señor Presidente, caja 83, carpeta 29). Se pudo establecer

el propósito de los guerrilleros de consolidar un proyecto de paz que controvertía las medidas del Gobierno al decretar el cierre de los Llanos, insistían en que se negociaran puntos de no agresión entre comandantes guerrilleros y militares.

Los rebeldes en el comunicado manifestaron que las fuerzas del ejército habían incrementado la persecución a sus copartidarios, describieron algunos hechos de las tropas en su propósito de invadir el llano por el río Upía. En este mismo comunicado cuestionaron el que los civiles en algunas localidades estaban siendo armados con instrumentos del ejército, para que, en asocio de liberales, se dedicaran a hostigar a dueños y trabajadores. Finalizan haciendo un llamado a la pacificación y protestando por el cierre a los Llanos decretado por el coronel Carlos Bejarano, jefe civil y militar de los Llanos.

En la conferencia guerrillera efectuada en febrero de 1952 acordaron hacer efectivo el recaudo del impuesto a los ganaderos y colocar altas multas a los conservadores y traidores. Para contrarrestar esta medida, nuevamente se puso en vigencia el decreto de cierre de los Llanos al mercado ganadero y se restringió la entrada de productos básicos, igualmente se incrementaron los operativos militares en el área, con apoyo de las famosas guerrillas de paz, que desarrollaban una labor de contrarrevolución, en estas batidas perdieron la vida varios dirigentes guerrilleros, entre ellos Eduardo Martínez. El resultado de esta ofensiva fue el incremento del número de muertos y la zozobra de los habitantes.

Además se conformó un movimiento encabezado por el presidente Urdaneta Arbeláez, con participación de líderes del liberalismo y del conservatismo para tratar de llegar a un acuerdo (negociación) en contra del bandolerismo y a favor de la pacificación del país (se publicó durante todo el mes de abril).

Tanto las fuerzas del Gobierno como de la guerrilla incrementaron los operativos (El Siglo, 8 de abril de 1952). La preocupación central del Gobierno fue la exterminación de los «bandoleros», para combatirlos se incrementaron la persecución y las acciones bélicas, teniendo en cuenta que estos «bandidos», según el Gobierno, eran parte fundamental del comunismo, que operaba en Colombia como fuerza ilegal, por eso era necesario eliminarlos.

Los cuestionamientos sobre la situación de orden público fueron constantes, de esta se responsabilizó a los «bandoleros»; infortunadamente no tenemos datos concretos acerca de la persecución de la policía, lo cual no significa que su labor se haya apaciguado. De acuerdo con las

entrevistas y relatos de vida, a muchas personas les tocó huir con sus familias o dormir en el día y en la noche realizar sus labores, pero si eran halladas por la policía, antes de matarlas, eran torturadas en señal de venganza y castigo.

En un documento anónimo, hecho por un ciudadano liberal, dirigido al presidente, se denunciaron diversas irregularidades de la fuerza pública:

Quiere preguntarse usted honradamente ¿quiénes son los facinerosos, los bandidos, los salteadores de caminos, los incendiarios, si son los que amparados por las armas que la nación ha comprado con recursos de todos para defender la constitución y las leyes pagadas con nuestros dineros, respaldados por langues, cañones y aviación y por Gobierno arrebatado por asalto, por medios inicuos comenten toda clase de tropelías, asesinatos, robos, o si son los valientes que hambreados sin sueldo, sin armas, sin el frondoso presupuesto doblado ahora para ellos se han lanzado heroicamente a los campos a luchar contra la ilegalidad, contra el asesinato oficial, el sadismo oficial, el peculado, la muerte de las liberales libertades públicas conquistadas en el siglo y medio de batalla? (Archivo General de la Presidencia de la República, despacho del Señor Presidente, caja 85, carpeta 29).

Y dejaba en interrogante una serie de situaciones que aquejaban a la población civil, pero que según el Gobierno los únicos responsables eran los guerrilleros por no someterse a las leyes del «orden».

Los diálogos entre los dirigentes de los dos partidos generaron pugnas; precisamente en el interior del conservatismo se consolidaron tres tendencias y en la Convención Conservadora efectuada en mayo de 1952 se pudo establecer que «había tres facciones, una del conservatismo, otra de los curiosos y una tercera la de «los conservadores legítimos» (Revista Semana, 31 de mayo de 1952), estos últimos llevaban cartelones con leyendas alusivas «abajo los enemigos del régimen», «abajo los traidores», «abajo quienes pactaron con el adversario»; al ingresar Gilberto Alzate Avendaño se oyeron vivas a Mariano Ospina Pérez y a Guillermo León Valencia» (Revista Semana, 31 de mayo de 1952). Con estos pronunciamientos se afianzó la tendencia del alzatismo, conformada a comienzos de 1951, que proponía la consolidación de un movimiento menos homogéneo orientado por Avendaño; mientras la tendencia moderada, encabezada por los Olano Correa, proclamaba la reelección de Mariano Ospina Pérez en los comicios siguientes.

Mientras los líderes debatían la orientación y liderazgo de sus facciones, en los campos la lucha entre civiles y uniformados se afianzaba. El ministro de Gobierno declaró a través de *El Siglo* que la violencia liberal se había recrudecido en Boyacá, donde los ataques de «bandoleros» armados en las poblaciones de occidente, especialmente en Muzo, en seis días había arrojado un total de 64 muertos; según el ministro, las víctimas eran conservadores y los atacantes liberales. En el editorial del día siguiente resaltaba que los focos de violencia estaban ubicados principalmente en los Llanos Orientales, en el noroeste antioqueño, en el territorio Vásquez, en algunas regiones de Boyacá y Cundinamarca, y en las zonas montañosas de Chaparral (Tolima), pero su mensaje se limitaba a hacer una denuncia contra el adversario sin comprender la situación que vivían los campesinos, sus alcances y las confrontaciones entre sociedad civil y fuerza pública.

En mayo hubo otra serie de atentados, el 12 se produjo un asalto a las veredas de Capellanía, Morro y Lajas del municipio de Miraflores, que dejó un saldo de aproximadamente cuarenta y cinco muertos (Archivo General de la Presidencia de la República, fondo Despacho del Señor Presidente, 1952, caja 85, carpeta 29, folio 10). Entre los muertos había agentes de policía y civiles, y además de los asesinatos hubo mujeres y niños desaparecidos (robados), así como robos e incendios.

Esto hizo que la guerrilla emprendiera diversos operativos en varias direcciones, entre estos el de Pachiaquiario (abril de 1952), asesinato de los policías y toma del armamento, y luego se produjeron bombardeos militares de las Fuerzas Armadas FAC. Después se llevó a cabo la toma de Orocué (10 de junio de 1952) y luego la toma de Pavijay (Meta) con un saldo de 96 soldados muertos, de la que se hablará más adelante.

El 18 de junio una emboscada a la población de Orocué (Meta) dejó un saldo de 12 soldados muertos, un suboficial, un funcionario y otros desaparecidos. Según los medios de comunicación, la fuerza pública inició una arremetida contra los «bandoleros», en la cual fue herido Guadalupe Hunda [Salcedo], considerado uno de los «bandoleros» más famosos de los Llanos. El Gobierno inició una campaña para debilitar el movimiento, informó que Guadalupe había sido gravemente herido, que muchos de los «bandoleros» estaban encerrados y los demás asustados y habían decidido entregar sus armas (Revista Semana, 31 de mayo de 1952, p. 9).

Este falso informe enfureció a Guadalupe Salcedo y lo llevó a organizar ayo 31 de 1952), pp. 9- 10s armas y abandonando a sus jefes. Tenidos dos m'en el cual se encontraban dos menores. uno de los atentados más fuertes, el 12 de julio en Pavijay (departamento del Meta) se produjo la

muerte de 96 soldados del ejército en una emboscada. A partir de este hecho la dirección liberal, que antes había apoyado la labor de los «bandoleros», rechazó enfáticamente este hecho y pidió la investigación de tal forma que se castigara a los responsables. La venganza del ejército recayó sobre la población de Puerto López el 14 de julio, en la plaza principal fueron aniquilados selectivamente los hombres que se consideraban informantes de la guerrilla, de esta forma se inició la represión de las fuerzas armadas y la condena al bandolerismo por parte de la Dirección Nacional del Liberalismo.

Hernando Esquivel, uno de los entrevistados, ubica la masacre de los 96 soldados en el sitio Carubare en camino hacia Puerto López. Según la versión, Guadalupe Salcedo, comandante guerrillero del operativo, ordenó que se les quitaran los uniformes y las armas a los masacrados, lavarlos, coserlos y colocárselos.

Ellos falsificaron una orden de traslado al comandante del puesto de Rondón en Arauca, y llegaron en la tarde, después de la 6, ya oscuro, y le mostró la orden al teniente que estaba ahí y él iba como capitán, entonces le dijo ponga a descansar a sus hombre y ponga los fusiles en el pabellón, entonces los guerrilleros se tomaron el puesto, desarmaron a los soldados, sin disparar un solo tiro y cogieron otros 100 fusiles (H. Esquivel, entrevista, 2004).

Sobre los hechos, la prensa señaló:

Tenemos que lamentar el incidente que se presentó el sábado pasado en un sitio de los Llanos Orientales, vecino al río Meta. Una cuadrilla de malhechores, al mando del conocido bandolero Guadalupe Salcedo, preparó y llevó a cabo una emboscada de grandes proporciones, en la cual dio muerte alevosa a noventa y seis miembros del ejército nacional, entre ellos dos tenientes. En esta forma lo que se ha llamado guerrillas o grupos de bandoleros u hordas comunistas han respondido para obtener la pacificación del país expresada en el reciente decreto (Revista Semana, 26 de julio de 1952, p. 8).

Ante estos hechos también las fuerzas armadas decidieron emprender una campaña para exterminar el movimiento guerrillero, que atentaba contra la tranquilidad del país y muy especialmente contra los trabajadores campesinos, «en adelante [atacarían] sin tregua y sin descanso, hasta libertar todo el suelo colombiano de los enemigos del orden, de la vida de los ciudadanos, de la prosperidad de la república y de la propiedad privada» (Revista Semana, 26 de julio de 1952, p. 9).

La situación de orden público no solamente se orientó a combatir a las fuerzas militares (policía y ejército), también se desataron ciertas acciones contra los líderes políticos liberales como José Joaquín Castro Martínez, a Roberto García Peña, director de *El Tiempo*, a quienes les pusieron una bomba en su casa, tal vez estos hechos obedecían a la denuncia pública que hacían sus líderes frente a los «bandoleros» y como venganza a la Dirección del Liberalismo por haberles quitado el respaldo.

Posteriormente se produjeron otros ataques guerrilleros, y el 20 de julio de 1952 se desarrolló una conferencia guerrillera donde se tomaron las medidas para la toma de Sevilla (Llanos), y se adelantaron propuestas con miras a consolidar el «comando nacional de coordinación guerrillera», para unificar el movimiento y establecer acciones conjuntas a fin de derribar el régimen.

En agosto fueron capturados 61 guerrilleros en el Carare y en otras regiones de los Llanos, entre los que figuraban dos cabecillas: Chucho Lozano y Relámpago. A estos personajes se les dictó auto de detención, por los delitos de asociación para delinquir, homicidios, incendios y violencia carnal (*El Siglo*, 19 de agosto de 1952). La captura de estos personajes motivó la acción del Gobierno, el mejor camino para exterminarlos, según el Gobierno, era perseguirlos y someterlos.

Tomando como base la crisis del liberalismo y el rompimiento entre los «bandoleros» y la dirección nacional, Alfonso López decidió renunciar a esta última, por considerar concluida su gestión; en esta renuncia López hizo un balance sobre su labor en favor de la pacificación, resaltando diálogos y correspondencia con el Gobierno, viajes a los Llanos y diversos obstáculos sin ninguna respuesta favorable, por consiguiente ratificó su decisión de retirarse de la Dirección Nacional del Liberalismo, el 23 de agosto de 1952.

Después de la renuncia de López hubo una manifestación, tras la cual los diarios *El Tiempo* y *El Espectador* fueron incendiados (6 septiembre), así como las residencias de los expresidentes López y Lleras y la sede de la Dirección Nacional Liberal. Los hechos se presentaron después del sepelio de cinco agentes de policía asesinados en Rovira (Tolima), al regresar de la ceremonia se produjo una manifestación en protesta contra *El Tiempo* y *El Espectador*, la policía intervino y contuvo a los manifestantes, pero horas más tarde se conformó un grupo que agredió e incendió las instalaciones de los periódicos.

Para evitar críticas contra el Gobierno se hizo más enfática la censura de prensa, se expidió una resolución, con el fin de ratificar el papel de la

comisión de censura en el sentido de autorizar las publicaciones que debían circular ante la opinión pública. La comisión revisaría el material, es decir, «editoriales, información, noticias relacionadas con el orden público, político, cuestiones militares y de policía, investigaciones criminales o administrativas, asuntos económicos, cuestiones internacionales, toda clase de avisos, títulos, fotografías y caricaturas» (Resolución 2 de 1952). El material que no se mencionaba quedaba bajo la potestad del director de prensa o revista, la violación a esta reglamentación quedaría a disposición del Gobierno de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3521 de 1949. A partir de esta censura se limitó la emisión de reportajes relacionados con la situación de orden público y desde luego no se publicaron críticas al Gobierno, simplemente los periódicos en ocasiones informaron generalidades sobre la situación nacional e internacional.

A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno, la guerrilla se había fortalecido, tanto por la preparación física y militar para el combate de la primera etapa como por el creciente proceso de unificación de la resistencia y, sobre todo, por el apoyo, en diversas formas, de la población civil. Esta fue la etapa de transformación de los líderes guerrilleros, de «bandidos políticos» en «bandidos sociales», pues mientras el Gobierno y las directivas liberales los acusaban de criminales y forajidos «bandoleros», ellos gozaban de un amplio respaldo popular.

Esto permitió que la guerrilla consolidara un proyecto revolucionario y en esta dirección emitió la primera ley de Llano, suscrita el 11 de septiembre, para gobernar el territorio que estaba fuera del control estatal. En esta ley se establecieron sanciones judiciales para quienes adquirieran bienes o inmuebles a nombre de la revolución, se promovería la producción agrícola como parte de la economía de guerra, además se diseñaron tácticas más severas con el cobro de impuestos y la confiscación para los evasores (Sánchez, 1985, p. 244).

Por su parte, el Gobierno, a través de las fuerzas militares y de la contraguerrilla con personal mixto, civil y militar, utilizó los mismos métodos, tropas móviles, sorpresivas y conocedoras del terreno. Para tener éxito en la ofensiva fue necesario contratar personal de la misma guerrilla, ofreciendo dinero, bienes y prebendas judiciales; por eso muchos guerrilleros estando aún en el movimiento se convirtieron en contrachusma o contraguerrilla, unos fueron informantes y otros asesinos de sus copartidarios. La contraofensiva -o guerrillas de paz- incursionó en el movimiento guerrillero, con tanto poder que en diciembre de 1952 los hermanos Bautista fueron asesinados por sus subalternos.

La contrachusma fue una forma de ejército privado (autodefensas) consolidado especialmente para defenderse de los ataques de los «bandoleros» y evitar los robos. Denominados también guerrillas de paz, estos grupos de autodefensas estaban patrocinados por el Gobierno, eran civiles conservadores que se entregaban al Gobierno para ayudar a calmar la revolución. Los integrantes de las guerrillas de paz eran más bélicos que la misma policía, su actividad central era cortar cabezas y generar terror psicológico, al respecto citamos un caso:

Aquí hubieron (sic) hombres como Pablo Herrera, como los Reyes Restrepo, como los Prieto, Severo Prieto, que dijeron que eran los guerrilleros de paz, que subieron al ejército para pelear contra la guerrilla, pero por ejemplo Pablo Herrera, por ahí por donde queda el parque de los centauros, ahí llegó con dos cabezas de dos guerrilleros que se las quitó en Cumaral y las metió en unos costales y se puso a jugar fútbol con ellas. Los dos guerrilleros eran entonces el finado Álvaro Parra y Pablo Herrera, [con la cabeza del segundo] se adornó la primera estaca de la finca de Cumaral (H. Esquivel, entrevista, 2004).

Por su parte, la guerrilla, en cabeza del comandante Álvaro Parra, hizo visitas por todos los comandos del Llano, a fin de organizar un congreso guerrillero que reorientara el movimiento hacia la liberación nacional. Y desde allí se iniciaron los preparativos para el congreso guerrillero que se llevaría a cabo en 1953.

La guerrilla organizó tres reuniones consecutivas, en las que se intentó consolidar un verdadero movimiento revolucionario con fines políticos y estrategias militares. Paulatinamente se fueron perfeccionando las tácticas, que iban desde la educación política hasta la formación militar y manejo de armamento para los combatientes. La primera reunión y acercamiento entre las guerrillas liberales que operaban en el Tolima, Cundinamarca y otras regiones del país, con las guerrillas comunistas, tendría lugar a finales de 1952 o comienzos de 1953. El coronel Eduardo Franco Isaza, jefe guerrillero, dio instrucciones para unificar todo el movimiento guerrillero de los Llanos, se consolidaría un comando volante con la orientación de Guadalupe Salcedo; después, hacia los meses de mayo y junio se convocó para una asamblea revolucionaria de jefes guerrilleros (10 de junio), pero no tenemos datos de si se efectuó y qué incidencia tuvo para el fortalecimiento del movimiento.

Asimismo empezó a organizarse el congreso guerrillero que se efectuaría en junio; por la misma época tendría lugar la Asamblea Nacional Constituyente que defendería el establecimiento de un Gobierno

corporativista. Entonces podemos ver dos proyectos políticos simultáneos y antagónicos que se debatían entre la revolución y el orden. Los llamados «bandoleros» abogaban por la continuidad de un Gobierno democrático y republicano, mientras los dirigentes políticos que administraban el poder defendían el establecimiento de un régimen corporativista y dictatorial, con el fin de combatir la «anarquía».

Crisis política y social: fin de un régimen

Al iniciarse las campañas para las elecciones legislativas de 1953, el país vivía una serie de incertidumbres de orden social y político que mantenían en permanente estado de zozobra a los dirigentes. En cuanto a lo social, el incremento de las tácticas militares (bombardeo, guerrillas de paz, campos de concentración, torturas y otros) para combatir a la guerrilla no surtió ningún efecto en términos de control del poder; por el contrario, el aumento de las tácticas para combatir a los alzados en armas los motivó a estos a organizarse política y militarmente. Precisamente con las reuniones de comandantes guerrilleros efectuadas en 1952 y comienzos de 1953, el movimiento logró unificarse a nivel nacional y se estructuró mediante el establecimiento de objetivos comunes y en torno a un proyecto político con el cual pretendían derribar al Gobierno.

Con respecto a lo político, el liberalismo, con el pronunciamiento de Alfonso López en agosto de 1952, prácticamente estaba en un estado de retiro (alejado de la escena política), que se veía reflejado en la debilidad del partido, mientras en el interior del conservatismo se acrecentaron las polémicas entre moderados y reaccionarios, que llevaron a la desunión del partido. Desde finales de 1951 había dos tendencias en el conservatismo: los alzatistas y los gobiernistas. Los alzatistas, encabezados por Alzate Avendaño, consolidaron un movimiento a partir de su expulsión del partido en 1951 y se declararon defensores del levantamiento de la censura de prensa y del retorno de la democracia constitucional, que los acercaba al liberalismo; mientras los gobiernistas defendían el proyecto corporativista y autoritario promovido por Laureano Gómez.

La división fue tan profunda que los alzatistas organizaron su propia convención y Alzate fue tildado de traidor a la patria y al partido. La tendencia moderada propuso la candidatura de Ospina Pérez, aunque no era considerado un verdadero conservador por los laureanistas. Gómez consideraba que uno de sus partidarios podría ser más leal a las reformas constitucionales y de esta forma podría tener más control sobre el partido y su orientación. Alzate decidió unirse a la reelección, aunque no tenía mucha simpatía política, y Ospina era presentado como el candidato que podría unificar el conservatismo y replantear la reaccionaria contrarrevolución promovida por Laureano Gómez.

La orientación del programa de Ospina ya no era la unión nacional, en su proclamación como candidato señaló: «no será posible hoy hacer un Gobierno de unión nacional, porque ni los hombres ni las circunstancias ni la vida misma de la nación hacen posible un Gobierno distinto al Gobierno del partido conservador» (Revista Semana, 18 de abril de 1953, p. 5). De esta forma se ratificó la orientación del conservatismo hacia la continuidad de un Gobierno de partido y aunque era partidario de la reforma constitucional, no estaba de acuerdo con ciertos cambios trascendentales para la política nacional, pero su falta de claridad lo mantenía en la incertidumbre política y lo acercaba a la pretensión dictatorial.

Aparentemente, todo el conservatismo apoyaba la candidatura de Ospina, aunque no compartía que el alzatismo fuera un respaldo, aun así veían en el expresidente la mejor opción para unificar al partido, pero en forma silenciosa se consolidó una tendencia del oficialismo en oposición a la reelección, la cual permaneció oculta hasta abril de 1953.

Con respecto a las elecciones, se proyectó consolidar nuevamente un congreso homogéneo conservador. En Boyacá este partido estaba conformado por dos tendencias disidentes: villarrealistas, encabezadas por José María Villarreal, o «jimenato», defensores del antireeleccionismo de Ospina, orientado por Rafael Bernal Jiménez; y la tendencia antivillarrealista, que seguía las orientaciones del alzatismo, coordinada por Francisco Plata Bermúdez. El liberalismo, por su parte, ratificó la abstención en todo el territorio nacional.

En las elecciones del 15 de marzo empezó a regir el Decreto 2830 de 1952, que reemplazó el sistema por cuociente electoral. A partir de la expedición de esta norma los partidos podían presentar sus listas oficiales y disidentes con posibilidad de triunfo, porque las curules se adjudicaban proporcionalmente, según el número de sufragios que obtuvieran los candidatos inscritos, y de acuerdo con el número de votos obtenidos por un partido, este podía llevar la representación. Con esta norma, las elecciones de marzo serían la base para determinar el número de representantes que le correspondía a cada partido y de acuerdo con estos se asignarían las curules.

A los partidos llamados minoritarios

se asignará exclusivamente entre partidos distintos del que haya obtenido la mayoría, a razón de una curul por toda vez que los sufragios obtenidos por cada uno de estos partidos cubre el número de votos con que resulte elegido cada miembro de la mayoría,

determinando ese número mediante la división del total de los votos consignados a favor del partido mayoritario por el número de curules asignadas a este (Revista Semana, 21 de marzo de 1953, p. 6).

De acuerdo con este Decreto, a Boyacá le correspondían trece senadores, de los cuales siete eran conservadores y los demás de la oposición, si los liberales no se presentaban a los comicios, seis curules quedaban vacantes.

En Boyacá se obtuvieron 117 027 votos, la tercera votación más alta del país, después de Cundinamarca y Antioquia. A nivel nacional, estos resultados equivalían al 11,5 % de los resultados. A nivel general, los conservadores ganaron 76 de las 132 curules y las 56 restantes, destinadas a la minoría, permanecieron vacantes según la normatividad vigente (Martz, 1969, p. 128; Eastman, 1982, p. 646).

El mismo día de las elecciones para Congreso, 15 de marzo, se efectuó la segunda reunión para la Asamblea Nacional Constituyente, que no generó las expectativas esperadas. Esto, junto con la convención que proclamó la candidatura de Ospina, desestabilizó las pretensiones de Gómez y lo llevó a promover una convención laureanista para lanzar un candidato de su elección.

La división hizo que los líderes diseñaran otro tipo de estrategias, por ejemplo, los ospinistas organizaron una manifestación el 9 de abril, que fue cuestionada por *El Siglo* y el laureanismo. De esta forma se afianzó la polémica en torno al imaginario de la violencia y de la posición de los conservadores frente a los hechos, cuyo lema fue «conciliación y beligerancia». La situación se hizo cada vez más tensa, Ospina tildó al Gobierno de totalitario e hizo énfasis en que ningún régimen podía continuar amparado en la fuerza y la coerción. En este mismo discurso destacó la labor de las fuerzas militares como cuerpo leal al Gobierno durante los hechos del 9 de abril y cuestionó la actitud de los líderes del conservatismo que decidieron huir ante los hechos, entre ellos Laureano Gómez.

Como táctica política y para ser consecuente con sus planteamientos, el Gobierno de Urdaneta, por mandato de Laureano Gómez, hizo declaraciones públicas sobre la consolidación de partidos, considerando inconstitucionales aquellos cuyas doctrinas y métodos de acción se consolidaran en torno a la conspiración contra los principios de la «democracia cristiana» (Revista Semana, 16 de mayo de 1953, p. 10) o contra la «estabilidad de la organización jurídica de la nación», y para cumplir con estas medidas se exigiría cuenta pública del origen de sus

recursos. El ministro de Guerra, mientras tanto, se refirió a la situación de miseria que vivían los pobladores de esta región, puesto que muchos de ellos se habían dedicado al «bandolerismo» y olvidaron la producción agraria que se constituía en el principal sustento de la población. También se denunció que el número de muertes por confrontaciones y hechos de violencia se había incrementado paulatinamente, por consiguiente tanto el Gobierno como la sociedad civil habían sido afectadas en forma indiscriminada.

Con relación al bandolerismo, el ministro de Guerra resaltó a comienzos de 1953 que solamente quedaban algunos focos en Magdalena, Antioquia y los Llanos, que, en ocasiones, incursionaban para robar y asesinar, pero, según él, este movimiento ya no tenía organización y no obedecía a ningún fin práctico, y los grandes núcleos subversivos habían desaparecido ante el avance de las fuerzas armadas -lo que quedaba era la resaca del bandolerismo- (Revista Semana, 24 de enero de 1953, p. 5).

En 1953 se incrementaron los operativos de las fuerzas aéreas y del ejército para dar inicio al plan de recuperación por la fuerza de las zonas en conflicto. La guerrilla respondió a estos atentados en Sabana Chiquita y Santa Helena donde hubo un saldo de 27 soldados heridos y 30 muertos.

En respuesta a la ofensiva guerrillera, el 15 de enero de 1953, tres aviones de la fuerza aérea bombardearon la localidad de Pajarito, después de ser evacuada la población por parte de la guerrilla (hermanos Franco). En febrero la guerrilla afianzó su ofensiva militar con minas y ataques apoyados en grupos de hombres (1000) entre una columna, y posteriormente se perpetraron otros asaltos como el de Aguazul y las Lajas.

No fue la lucha entre guerrilla y fuerza militar lo que generó el desequilibrio político, este era un problema que en apariencia el Gobierno tenía controlado y que en términos políticos frente a este aún no tenía mayor representatividad. Para el Gobierno la guerrilla no pasaba de ser un grupo de «bandoleros» que atentaba contra el orden público, y precisamente, su estructuración no fue la base del debilitamiento del régimen. Podríamos señalar que los puntos críticos fueron la división del conservatismo, las tácticas de Laureano Gómez frente a Rojas Pinilla, comandante general de las Fuerzas Armadas, designado el 26 de noviembre de 1952, y el proyecto de reforma a la Constitución.

Las Fuerzas Armadas desde 1930 habían permanecido prácticamente ajenas al debate político y aunque en ocasiones de peligro se les otorgaron poderes civiles en la administración del Estado, conservaban la lealtad

con el Gobierno. Sin embargo, incidentes o polémicas de carácter personal entre Laureano Gómez y Rojas Pinilla, que al parecer eran por rivalidad política, desestabilizaron el control del poder; incluso la administración de civiles les fue otorgada a los militares, para garantizar transparencia y «control del orden público».

Entre la crisis y la zozobra, Gómez vio una amenaza en el populismo de Rojas, puesto que en torno a él se podrían agrupar sus opositores e iniciar una conspiración contra el Gobierno, lo que no se imaginaba era que su antagonista era más conservador que la tendencia falangista. Para solucionar la situación creyó que debía destituir a Rojas Pinilla del cargo, y para lograr sus propósitos ordenó al jefe de las Fuerzas Armadas que inaugurara una línea aérea que conectara Hamburgo y Bogotá, mientras tanto el Gobierno le daría la baja; pero un grupo de dirigentes militares de su confianza le hizo ver que era una trampa para su destitución, inmediatamente Rojas inició en las Fuerzas Armadas una campaña contra Gómez.

Posteriormente diseñó otra estrategia que fue la falsa denuncia sobre tortura a Echeverría, un comerciante antioqueño acusado de conspiración contra Rojas Pinilla. Gómez denunció que Echeverría había sido detenido arbitrariamente y torturado; por estos hechos se hizo una denuncia contra Rojas y el presidente aprovechó para proponerle al ministro de Guerra, Lucio Pabón, ocuparse de la investigación de los hechos. Pabón se limitó a plantear que sobre el caso Echeverría cursaba una investigación militar adecuada, lo que da la sensación de que Pabón conocía la división que se estaba generando en el interior de las fuerzas militares, que era más fuerte que la confrontación partidista liberal-conservadora-, puesto que se ponía en juego el poder y las armas con la dirección de las Fuerzas Armadas.

El 13 de junio Laureano Gómez citó a una reunión al presidente encargado, Urdaneta Arbeláez, y a Lucio Pabón, ministro de Guerra, para analizar la situación. En esta reunión Gómez solicitó que se expidiera un decreto para exigir el retiro de Rojas, pero tanto el ministro como el presidente encargado se negaron. Entonces Gómez, lleno de ira, exclamó que reasumiría la Presidencia, después de una ausencia de diecinueve meses. Urdaneta, por su parte, se mostró sereno ante la decisión, en ese mismo momento los ministros renunciaron para permitir que Gómez nombrara su gabinete. El primer acto administrativo fue el decreto de nombramiento del ministro de Guerra, que recayó en Jorge Leyva Durán (laureanista) y el del general Régulo Gaitán, quien reemplazaría a Rojas Pinilla.

El ejército envió un aeroplano para trasladar a Rojas Pinilla desde Melgar, donde se encontraba de vacaciones. El nuevo jefe militar se disponía a comunicar a los guardias la decisión del presidente, pero estos ya estaban avisados y cuando Leyva y Gaitán llegaron a los cuarteles de Caldas, a las afueras de Bogotá, fueron puestos bajo arresto (1:30 p.m.), entretanto en Bogotá las fuerzas militares controlaron la situación y arrestaron a Gómez en su propia casa; igualmente se incrementó el pie de fuerza en Bogotá y se dio la orden de impedir que Gómez retomara el poder. Después de una reunión entre Urdaneta y Rojas, este último le pidió que asumiera el poder, pero Urdaneta decidió no aceptar por lealtad con Gómez. De esta forma, la única alternativa era que Gustavo Rojas Pinilla asumiera el poder.

La polarización entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas¹⁶ llevó a la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla, convirtiéndose en el primer presidente militar del siglo XX que tomaba el poder por «un golpe de Estado» y no por elección, como había ocurrido con los demás mandatarios.

Al parecer, para muchos colombianos el derrocamiento del Gobierno constitucional fue la salida a la crisis política y social, teniendo en cuenta que aún no había un proyecto político de resistencia sólido, el «golpe de Estado» era el único camino. A las 10 de la noche se informó a la opinión pública: «por la paz de la nación y el futuro de Colombia queremos informar que el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla ha acabado de asumir la presidencia de la república con el apoyo unánime de las fuerzas armadas, de la policía nacional, del directorio nacional del partido conservador, del doctor Mariano Ospina Pérez, de Urdaneta Arbeláez y Lucio Pabón» (citado por Martz, 1969, p. 217).

Con el nuevo Gobierno se inició otra etapa para los partidos políticos y para la sociedad colombiana en general, puesto que uno de los focos centrales de Rojas fue controlar la situación de orden público y «ofrecer garantías». De esta forma los directorios políticos podrían funcionar de acuerdo con sus estatutos; por consiguiente, los jefes liberales exiliados regresaron al país, mientras el directorio conservador se reorganizó bajo la jefatura de Mariano Ospina Pérez. La política con los «bandoleros» fue

¹⁶ "A las 6:30 corría el rumor de que Rojas Pinilla había asumido el poder (Luis Ignacio Andrade, exministro de Gobierno), pero no era así, Rojas había asumido el comando de las fuerzas militares y eran las fuerzas militares las que tenían el control de la situación; sin embargo, en las calles lo que perfilaba era desfiles de militares y patrullas, la ciudad estaba controlada por el ejército" (Revista Semana, 20 de junio de 1953, p. 5). "En el palacio, en la sala principal conversaba Urdaneta y Rojas Pinilla, este le explicaba que frente a los hechos debía asumir el mando, él respondía que no le era posible mientras Gómez fuera el titular en ejercicio, entonces Rojas Pinilla declaró: "como la nación no puede quedar sin Gobierno y alguien debe gobernar, yo asumo el poder". Rojas Pinilla asumió el poder a las 10 de la noche a nombre de las fuerzas armadas" (Revista Semana, 20 de junio de 1953, p. 5).

de negociación e incremento de las acciones militares en áreas de operación, como ocurrió con las guerrillas comunistas del Sumapaz y con ciertos líderes de las guerrillas liberales del Tolima y de los Llanos.

En este capítulo hemos hecho alusión al impacto de la coacción y violencia oficial contra los sectores populares, que vieron en la resistencia la estrategia para hacer frente a las fuerzas del Gobierno, que amenazaban con el aniquilamiento a menos que adoptaran su credo político. Como tácticas de protección y garantías para preservar la democracia, el Gobierno decretó estado de sitio, censura de prensa y culminó el control con la clausura de los concejos y con el incremento de potestades al ejecutivo. De esta forma el sentido de la democracia se transformó en un proyecto corporativista que le dio poca importancia a la opinión de las masas y más a la concentración del poder en el mandatario.

Los Gobiernos de Ospina Pérez (1949-1950), el de Laureano Gómez (1950-1951) y el de Urdaneta Arbeláez (1951-1953) fueron la base para la consolidación de un Gobierno militar y autoritario. Este periodo de transición significó el afianzamiento del totalitarismo en torno al conservatismo, la persecución a todo movimiento social, especialmente a las guerrillas liberales y comunistas, que eran el único foco de resistencia popular, de oposición al régimen y de alternativa democrática.

Los alzados en armas, que inicialmente seguían el esquema de sus jefes políticos en torno a la defensa del liberalismo, lograron agruparse militar y políticamente y consolidar un proyecto político alternativo a partir de la unificación del movimiento guerrillero para derribar el régimen; de esta forma lograron que las bases de apoyo tomaran consciencia del sentido de la revolución. Por lo tanto, los sectores que apoyaron y orientaron la revolución se posesionaron como ciudadanos capaces de asumir una posición crítica frente a sus gobernantes y no de obediencia frente al gamonal y líder político.

Consideraciones finales

A manera de conclusión podemos resaltar que el proyecto de Unión Nacional (1946-1950), creado para mediar la situación de orden público, se convirtió en una táctica para evitar que la élite perdiera protagonismo político y para que el conservatismo reconquistara el poder. En términos de orden público llegó a ser uno de los periodos de mayor índice de violencia, tal vez porque se le dio mayor presencia a las fuerzas militares hasta el punto que los cargos públicos que eran ocupados por civiles fueron otorgados a policías, guardias de rentas y ejército, especialmente en periodos electorales. Esto dio la sensación de que el Gobierno democrático, intempestivamente, dio un giro hacia el totalitarismo, caracterizado por la coacción, la defensa de un partido y el fortalecimiento de lo militar que respaldaba la acción del gobernante.

Los sucesos del 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, produjeron un «rompimiento» del sistema político tradicional, del caudillismo a un movimiento de masas; de la pasividad al pronunciamiento de los sectores populares, hasta organizar grupos de autodefensa para hacerle frente a la persecución oficial (policía chulavita). En términos ideológicos, las masas, a través del movimiento, asumieron una concepción revolucionaria frente al conservatismo y a la coacción oficial. Este hecho es visto por la historiografía como «la gran violencia» que partió la historia del país y que le permitió a las masas asumir una posición política, y de esta forma enfrentar con las manifestaciones la violencia oficial, que se habían generado por parte de los funcionarios y la fuerza pública.

Los comicios de junio de 1949 fueron cruciales para el afianzamiento del conservatismo, estuvieron acompañados de fraude y violencia, entre civiles y militares, lo que significó la homogeneización política de Boyacá por la coacción, el asesinato, la tortura y el destierro de un sinnúmero de liberales. La respuesta de estos fue la conformación de grupos de resistencia campesina en los Llanos Orientales, que posteriormente tomaron el nombre de guerrillas liberales, «bandoleros» liberales o chusma liberal. Así, la beligerancia del Estado a través de sus funcionarios incidió en que los civiles se organizaran para la defensa y para la resistencia. Los diversos escenarios de violencia que se han presentado en este texto dejan nociones polémicas en la historia de nuestro país. La dinámica bipartidista de exclusión generó brechas profundas e irreconciliables, antagonismos, más entre la población que entre la élite, lo cual llevó a

que los miembros de ambos partidos se agredieran en forma indiscriminada para tratar de conservar unos intereses políticos ajenos a su acción.

La polarización político-partidista generó una imagen del amigo y enemigo que se convirtió en parte de la cultura política regional y nacional, y el resultado del conflicto bipartidista y la extrema polarización entre Gobierno y «bandidos» se transformó en un problema que ha permanecido en la sociedad colombiana del momento. Ojalá que los procesos de negociación que se adelantan en nuestro presente pongan fin al conflicto que se generó justamente el 9 de abril de 1948.

Esperamos que los elementos que aquí se expusieron y analizaron nos puedan servir para tener siempre presente en nuestra memoria colectiva que mientras las élites liberales y conservadoras negociaban en los recintos, la población seguía combatiendo a su compadre y amigo en los campos y veredas.